

FOJA: 113 .- .-

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 2º Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-15587-2018
CARATULADO : TORRES/FISCO DE CHILE, CONSEJO DE
DEFENSA DEL ESTADO

Santiago, veintiséis de Diciembre de dos mil diecinueve

PROCEDIMIENTO: ORDINARIO

MATERIA: INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS

VISTO:

Con fecha 28 de mayo de 2018, rectificando el 15 de junio de 2018, comparece el abogado Nelson Caucoto Pereira, con domicilio en Pasaje Doctor Sótero del Río N° 326 oficina 1104, comuna y ciudad de Santiago, en representación de don **LUIS ALBERTO TORRES GUZMAN**, conductor, domiciliado en Virgen del Pilar N° 0912, comuna de La Cisterna, de **CARLOS ALBERTO TORRES GUZMAN**, comerciante, del mismo domicilio anterior, y de **RAUL ANTONIO TORRES GUZMAN**, comerciante, domiciliado en Simón Bolívar N° 780, Población Luis Cruz Martínez, comuna de Chillán, y todos para estos efectos en Pasaje Doctor Sotero del Río N° 326 oficina 1104, comuna y ciudad de Santiago, e interpone demanda de indemnización de perjuicios, en juicio



ordinario, en contra del FISCO DE CHILE, representado por la Presidenta del Consejo de Defensa del Estado, doña María Eugenia Manaud Tapia, abogada, ambos con domicilio en calle Agustinas N° 1687, comuna de Santiago.

Expone que sus representados son hermanos de don Ernesto René Torres Guzmán, detenido y desaparecido desde el 4 de octubre de 1973 a manos de agentes del Estado, según se ha establecido por el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, mejor conocido como Informe Rettig. Por ello, establecida la responsabilidad de agentes del Estado, vienen en demandar la reparación de todo el daño causado.

Sostienen que los antecedentes consignados, de acuerdo al derecho internacional, califican como un crimen de lesa humanidad, lo que sería fundamental a la hora de resolver en cuanto a la responsabilidad de reparación que le cabe al Estado de Chile en este caso.

Asimismo, citan profusa doctrina y jurisprudencia, en la que se ha considerado un estatuto de normas que privilegian y desarrollan los principios de la primacía constitucional y de juridicidad, conformando el estatuto de la responsabilidad extracontractual del Estado, la que debe propender al bien común, siendo una responsabilidad objetiva, que debe considerarse a la luz de las normas de carácter público e internacionales, y aquellas de tratados suscritos por Chile, las que deben primar por sobre aquellas meramente privadas, tornando así en imprescriptibles las acciones patrimoniales derivadas de las violaciones a los derechos humanos.

Agregan que en el caso de autos, existe un daño de carácter moral que se expresa en dolor, sufrimiento, angustia, sensación de pérdida, rabia e impotencia ante una situación injusta e ilegítima que los hermanos de don Ernesto René Torres Guzmán, no estaban jurídicamente obligados a soportar, configurándose claramente



un daño moral que según la jurisprudencia es un daño indemnizable, por cuanto afecta a los atributos y facultades morales o espirituales de una persona, como consecuencia del ilícito, el cual, por lo demás, no requiere de prueba, bastando únicamente que las víctimas acrediten la lesión de un bien personal, para que se infiera el daño, el que en este caso cuantifican en la suma total de \$ 360.000.000, a razón de \$ 120.000.000 para cada uno de los demandantes.

Terminan solicitando que se condene al demandado al pago de la suma indicada para cada uno de los actores, o lo que el Tribunal determine, reajustada conforme a la variación del IPC, desde la fecha de interposición de la demanda, hasta el pago efectivo de la indemnización que se imponga, más intereses y costas.

Con fecha 5 de julio de 2018, se practicó la notificación de la demanda y su proveído.

Con fecha 24 de julio de 2018, el demandado contestó el libelo pretensor, solicitado el rechazo de este en todas sus partes.

En primer lugar, afirma que la pretensión económica demandada es improcedente porque, en la especie, existe un sistema de reparación pecuniaria, para el núcleo familiar más cercano, padres, hijos, cónyuge, -Ley N° 19.123- en el que se excluyó a los hermanos de los causantes detenidos por agentes del Estado, como beneficiarios de las leyes de reparación.

En segundo lugar, y sin perjuicio de lo anterior, tratándose de las víctimas por repercusión de las violaciones a los derechos humanos, como sería el caso de los demandantes, si bien no han tenido derecho a un pago en dinero, por la preterición legal, sí han obtenido reparación satisfactiva por el daño moral sufrido, a través de acciones de tipo simbólicas –construcción de memoriales, establecimiento del día nacional del detenido desaparecido, construcción del museo de la memoria-, así como también programas de beneficios asistenciales en salud y educación.



En tercer lugar, opone la excepción de prescripción de la acción civil de indemnización de perjuicios, conforme a lo previsto en los artículos 2332 y 2497 del Código Civil, debiendo en definitiva rechazarse la demanda en todas sus partes.

En subsidio de lo anterior, manifiesta que la indemnización del daño puramente moral no se determina cuantificando, en términos económicos, el valor de la pérdida o lesión experimentada, sino solo otorgando a la víctima una satisfacción, ayuda o auxilio que le permita atenuar el daño, morigerarlo o hacerlo más soportable mediante una cantidad de dinero u otro medio, sin que esto devenga en una fuente de lucro o ganancia, estimando que la cifra demandada -de \$ 120.000.000 para cada uno de los actores-, es absolutamente excesiva, teniendo presente las acciones y medidas de reparación adoptadas por el Estado de Chile en esta materia, y los montos promedios fijados por los Tribunales de Justicia.

Por último, asevera que los reajustes e intereses que se solicitan no proceden tratándose de una obligación dineraria que solo podría establecerse con motivo de la sentencia que resuelva la presente litis.

Con fecha 9 de agosto de 2018, se evacuó el trámite de la réplica. En ella, respecto a las dos primeras defensas opuestas por el demandado, se indica que los montos que otorga la Ley N° 19.123, además de no haber sido percibidos por los actores, solo constituyen pensiones de sobrevivencia por los brutales actos cometidos por el Estado durante el periodo comprendido entre 1973 y 1990, las que en ningún caso podrían reparar íntegramente el daño padecido por los familiares de don Ernesto Torres Guzmán. Agrega que la propia ley aludida no considera incompatibles las reparaciones simbólicas con una eventual indemnización de perjuicios.

Por otro lado, se argumenta que jurídicamente es insostenible afirmar que las únicas reglas que existirían para regular la responsabilidad del Estado son las contenidas en el Código Civil, por cuanto ello significaría negar validez y eficacia a



otras normas jurídicas de carácter constitucional, administrativo e internacional, reconociéndolo así la Corte Suprema en diversos fallos.

Por último, sobre los montos pretendidos y los reajustes, se indica que estos en definitiva los ha de fijar prudencialmente el tribunal al momento de dictar la sentencia.

Con fecha 24 de agosto de 2018, el demandado evacuó la duplica, en la que insiste en las argumentaciones ya vertidas en la contestación.

Con fecha 13 de noviembre de 2018, se recibió la causa a prueba, fijándose los hechos sustanciales y pertinentes sobre los cuales esta hubo de recaer, rindiéndose la documental y testimonial que obra en autos.

Con fecha 5 de agosto de 2019, se citó a las partes para oír sentencia.

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que, don **LUIS ALBERTO TORRES GUZMAN**, don **CARLOS ALBERTO TORRES GUZMAN**, y don **RAUL ANTONIO TORRES GUZMAN**, a través del abogado que los representa, demandaron en juicio ordinario de indemnización de perjuicios al Fisco de Chile, representado por la Presidenta del Consejo de Defensa del Estado, doña María Eugenia Manaud Tapia, a objeto de que el ente estatal sea condenado a pagar en favor en cada uno de ellos la \$ 120.000.000, o lo que el tribunal determine, más reajustes, intereses y costas, por concepto del daño moral que se les ha inferido con ocasión de la detención y desaparición de su hermano a manos de agentes del Estado el día 4 de octubre de 1973.

SEGUNDO: Que, legalmente emplazado, el demandado se opuso al libelo pretensor oponiendo, las excepciones de preterición legal y reparación satisfactiva, por no ser los demandantes beneficiarios de las leyes de reparación, sin perjuicio de existir reparaciones de tipo simbólicas y programas de beneficios asistenciales



para las víctimas por repercusión de las violaciones a los derechos humanos. Asimismo, opuso la excepción de prescripción extintiva conforme a lo previsto en los artículos 2332 y 2497 del Código Civil. Por último, alega lo desproporcionado que resulta la suma pretendida por los demandantes y la improcedencia de intereses y reajustes sobre una eventual indemnización que se declare en su favor.

TERCERO: Que los escritos de réplica y duplica fueron de mera profundización en los argumentos ya vertidos en la demanda y contestación.

CUARTO: Que, para la prueba de sus asertos, los actores rindieron, legalmente y sin objeción válida de contrario, la siguiente prueba documental:

- 1.- Certificado de nacimiento de don Ernesto René Torres Guzmán.
- 2.- Certificado de nacimiento de don Luis Alberto Torres Guzmán.
- 3.- Certificado de nacimiento de don Carlos Alberto Torres Guzmán.
- 4.- Certificado de nacimiento de don Raúl Antonio Torres Guzmán.
- 5.- Certificado de calidad de víctima de violaciones a los Derechos Humanos de don Ernesto René Torres Guzmán, emanado de doña Lorena Fries Monleón, Subsecretaria de Derechos Humanos, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
- 6.- Copia simple de la página 331 del Tomo 1, Volumen I, del Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, en la que consta la mención a don Ernesto René Torres Guzmán, como detenido desaparecido en manos de agentes del Estado.
- 7.- Informe de la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas, (FASIC), denominado “Consecuencias de la desaparición forzada, sobre la salud en familiares de detenidos desaparecidos”, del mes de agosto de 2003.
- 8.- Informe del Programa de Asistencia Integral de Salud, PRAIS, del Ministerio de Salud, denominado Norma técnica para la atención de salud de



personas afectadas por la represión política ejercida por el Estado en el periodo 1973-1990

9.- Informe del Instituto Latinoamericano de Salud Mental y Derechos Humanos, ILAS, denominado “Efectos físicos y psíquicos en los familiares de víctimas de violaciones de derechos humanos”, suscrito por la Directora Ejecutiva, Elena Gómez Castro, de enero de 2018.

10.- Copia del certificado de Operación, “Colecistectomía, drenaje tubular” de don Luis Torres Guzmán, de fecha 1 de julio de 1991, emitido por el Hospital Barros Luco y suscrito por el Dr. Rodríguez Pérez.

11.- Copia Informe de Biopsia, “Colecistitis Crónica Reagudizada, Linforadenitis reactiva inespecífica del ganglio cístico” de don Luis Torres Guzmán, de fecha 12 de julio de 1991, emitido por el Servicio de Salud y suscrito por el Dr. Felipe Moreno.

12.- Copia Informe “Ecotomografía Abdominal” de don Luis Torres Guzmán, de fecha 10 de julio de 1991, emitido por el Centro Médico y Dental el Llano Subercaseaux y suscrito por el Dr. Fernando Pino Valdés.

13.- Copia de EPICRISIS, “Colecistitis cr. Reagudizada litiasica” de don Luis Torres Guzmán, de fecha 15 de julio de 1991, emitido por el Hospital Barros Luco y suscrito por el Dr. Rodríguez Pérez.

14.- Copia de documento denominado, “Egreso UCIC” de don Luis Torres Guzmán, de fecha 14 de mayo de 2017, emitido por el departamento de Cardiología, del Complejo asistencia Barros Luco.

15.- Copia de documento denominado, “EPICRISIS” de don Luis Torres Guzmán, de fecha 22 de mayo de 2017, emitido por el Servicio de Medicina, del Complejo asistencia Barros Luco.

QUINTO: Que, también, los demandantes rindieron, legalmente y sin tachas, las testimoniales que a continuación se reseñan sucintamente:

- Isabel Edith Hernández Pavéz



Al punto de prueba N° 3 señaló que el daño moral, psicológico y físico sufrido por los actores ha sido muy grande, y que su madre también sufrió mucho, ya que salía a buscar a su hijo, sin saber su paradero, y que por los hermanos supo que han sufrido mucho con la pérdida, por hasta la fecha nada saben de su paradero; que don Raúl envejeció mucho, y ha sufrido enfermedades. Lo aseverado le consta por conocer a los demandantes desde hace más de 30 años.

▪ Javier Waldemar Quezada Cisternas

Al punto de prueba N° 3 manifestó que conoce desde hace como 20 años a don Carlos Torres, que siempre lo vio cabizbajo, distraído, que era mal genio, sin saber por qué, hasta que conversó con él, y le señaló que su hermano estaba desaparecido, que no sabía nada de él, y por ello su actitud. Después supo que había fallecido su mamá; que pasó el tiempo y seguía igual, más triste, más decaído, que le dio un coma diabético y lo llevaron al hospital. Cree que todo ello es consecuencia de los pensamientos, la tristeza, la depresión que tenía, y que ha seguido así hasta la fecha.

▪ Ruperto Orlando Morales Gálvez

Al punto de prueba N° 3 manifestó que conoce a don Luis Torres Guzmán, y a la familia por más de 30 años, que el daño moral existió, que don Luis sufrió un infarto en el año 2016 –le parece-, por las situaciones vividas y lo que vive en la actualidad por el hecho de tener un hermano desaparecido, por el menosprecio de otras personas que lo acusan de ser un terrorista, que la familia ha vivido no en forma digna por todo ello.

SEXTO: Que el demandado no rindió prueba alguna en apoyo de sus asertos.

SÉPTIMO: Que, es fundamental advertir que, según se observa en los escritos fundamentales de la etapa de discusión, no existe controversia en autos sobre la génesis de una responsabilidad patrimonial para el Estado con motivo de



los hechos retratados en el libelo de demanda, relacionados con la detención y posterior desaparición del hermano de los actores, Ernesto René Torres Guzmán, el día 4 de octubre de 1973, a manos de funcionarios de Carabineros y Militares.

De otro lado, el vínculo familiar que une a los demandantes con la víctima directa del delito señalado se encuentra acreditado por medio de los certificados de nacimiento singularizados con los numerales 1), 2), 3) y 4) del considerando cuarto, para los efectos del artículo 305 del Código Civil.

OCTAVO: Que, conviene insistir en que el demandado, al contestar el libelo pretensor, expuso asertos que no controvierten la detención y desaparición ilegal de don Ernesto René Torres Guzmán, a manos de funcionarios de Carabineros y Militares, sino que, además, implican la asunción de una responsabilidad civil del ente estatal por los daños causados a sus familiares como víctimas por repercusión del delito señalado.

En efecto, no puede desatenderse que la sola reacción del Fisco de Chile por medio de la oposición de excepciones de preterición legal, reparación satisfactiva y prescripción, contiene una confesión espontánea en relación con el nacimiento de una obligación indemnizatoria que tiene por deudor al ente público y por acreedor a los peticionarios, de modo que no se ha negado el vínculo obligacional, sino que sólo se le ha reputado extinguido por alguno de los modos liberatorios que se esgrimen.

A la luz de lo anterior, cobra sentido la regla probatoria contenida en el artículo 1698 del Código Civil, según la cual, “*incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o ésta*”, lo que justifica hacer recaer sobre el demandado la prueba de los presupuestos fácticos de los modos extintivos alegados.

NOVENO: Que, con todo, es preciso considerar que el asunto de marras no puede mirarse solamente desde el ámbito de lo privado, siendo indisociable a él el



denominado “principio de responsabilidad” que integra la noción del Estado de Derecho que consagran, en la actualidad, los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República, y que, conforme el artículo 38, inciso segundo, del mismo cuerpo normativo, se expresa en que *“cualquier persona que sea lesionada en sus derechos por la Administración del Estado, de sus organismos o de las municipalidades, podrá reclamar ante los tribunales que determine la ley, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiere afectar al funcionario que hubiere causado el daño”*. En la misma línea, se ha de entender el artículo 4 del actual texto refundido y sistematizado de la Ley N° 18.575, en cuanto prescribe que *“el Estado será responsable por los daños que causen los órganos de la Administración en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren afectar al funcionario que los hubiere ocasionado”*, rigiendo el precepto, inclusive, el obrar de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, por mandato del artículo 1, inciso segundo, de la misma Ley.

Se estima que, no obstante la época de los sucesos de marras –anteriores a la vigencia de los preceptos mencionados-, las normas aludidas imponen el análisis del caso sub judice bajo la óptica de los principios que han sido asimilados por nuestro ordenamiento jurídico interno en la materia, lo que no puede sino mirarse en concordancia con la asimilación y desarrollo de idénticos o semejantes principios en el campo del derecho internacional de los derechos humanos y que han adquirido rango constitucional por virtud del artículo 5, inciso segundo, de la Carta Fundamental. Así, entonces, y en cierta consonancia con lo que plantean los actores, se debe incluir, bajo este ángulo de la mirada, la debida consideración de lo regulado en los artículos 4, 5, 7 y 63 de la Convención Americana de Derechos Humanos y las disposiciones de la Resolución N° 60/147 de 21 de marzo de 2006, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en cuanto su interpretación y aplicación pudiere alcanzar el ámbito de las acciones reparatorias en el seno del derecho interno por causa de vulneraciones de derechos esenciales; y las normas,



aunque atinentes a las acciones penales derivadas de crímenes de lesa humanidad, que incluye la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad, los Convenios de Ginebra de 1949, y la Resolución N^o 3.074 de 3 de diciembre de 1973, de la Asamblea General de Naciones Unidas.

DÉCIMO: Que, sin perjuicio de lo expuesto, tampoco puede soslayarse que, todavía en el marco de este concierto normativo, la acción indemnizatoria que se ha intentado en autos se dirige a un propósito de naturaleza eminentemente patrimonial y no escapa a la aplicación del ordenamiento interno en materia de responsabilidad extracontractual del Estado, resultando, entonces, forzoso compatibilizar este estatuto con los principios antes enunciados, en especial, si se atiende a que no resulta discrecional ni, en definitiva, lícito a este tribunal prescindir de la aplicación de la legislación interna so pretexto de posibles reproches de constitucionalidad, siendo un criterio ya asentado que, en lo no incompatible con sus reglas especiales, la responsabilidad civil estatal se ve gobernada por ciertas disposiciones del Código Civil que rigen tanto a los sujetos de derecho privado como público, como sucede, verbo y gracia, con los artículos 545, 2320, 2322, 2329 y 2497 del Código Civil.

UNDÉCIMO: Que, despejado lo anterior, corresponde pronunciarse sobre la excepción de preterición legal y reparación satisfactiva opuesta por el demandado e inspirada en que los daños reclamados ya habrían sido objeto de mecanismos de compensación adoptados por el Estado para las víctimas por repercusión de violaciones a los derechos fundamentales. El oponente cita puntualmente reparaciones de tipo simbólicas –construcción de memoriales, establecimiento del día nacional del detenido desaparecido, construcción del museo de la memoria-, así como también programas de beneficios asistenciales en salud y educación.



DUODÉCIMO: Que constituyen hechos públicos y notorios las diversas acciones que ha adoptado el Estado de Chile, a través de la dictación de diversas leyes, con el objeto de promover la reparación del daño moral y patrimonial sufrido por las víctimas de abusos y violaciones a los derechos humanos y sus familiares directos, sin perjuicio de lo cual, el demandado en el presente juicio no ha logrado acreditar que los actores hubieren percibido beneficios con fines reparatorios y que fueren apreciables en dinero.

Con todo, es menester recordar que el objeto de la indemnización pretendida en este juicio viene dado por la magnitud del daño moral experimentado por los demandantes, en términos que, en concordancia con lo preceptuado en los artículos 1, 5 y 19 N° 1 de la Constitución Política del Estado y con lo dispuesto sobre el tópico en el artículo 2329 del Código Civil, imponen como medida del quantum indemnizatorio la reparación de “todo daño” causado a los peticionarios, es decir, la aplicación del denominado principio de la “reparación integral del daño” que está incorporado en todo ámbito de responsabilidad civil extracontractual, incluyendo la que rige al Estado y que, en armonía con los instrumentos internacionales señalados en el motivo noveno e invocados por los demandantes, cobra una especial aplicación en materia de vulneraciones a los derechos fundamentales, respecto de las que se consagra igualmente el derecho de las víctimas a obtener una reparación integral por vía civil o administrativa.

DÉCIMO TERCERO: Que, en esta línea de pensamiento, debe destacarse el carácter meramente satisfactivo de la indemnización por daño moral, consistente, ya no en indemnizar a la víctima de los perjuicios derivados de la vulneración de un derecho que admite restablecimiento, sino en proporcionarle una compensación, satisfacción o auxilio que morigere la lesión extrapatrimonial irreparable que ha sufrido, razón por la cual, la evaluación de su entidad o cuantía, con miras a asegurar su integridad, es una tarea de naturaleza prudencial que generalmente se



verifica judicialmente y que, con antelación a ella, no admite una determinación o liquidación a menos que se realice de común acuerdo por las partes. Dado lo anterior, no es posible sostener que las medidas de reparación simbólicas y asistenciales adoptadas unilateralmente por el Estado satisfagan por sí solas los parámetros de integridad o suficiencia que se vienen analizando.

DÉCIMO CUARTO: Que, a mayor abundamiento, los medios voluntarios de reparación asumidos por el Estado y fijados en las leyes dictadas al efecto, en modo alguno importan una renuncia o prohibición para que las víctimas acudan a la sede jurisdiccional a fin de que ésta, por los medios que autoriza la ley, declare la procedencia de una reparación por daño moral.

DÉCIMO QUINTO: Que, en resumen y a la luz de los razonamientos precedentes, en cuanto son conducentes a establecer que las medidas invocadas por el demandado no cumplen con el requisito de integridad o suficiencia que las revista de la aptitud extintiva que se pretende, y no obstante éstas en modo alguno a que la demandante concurra a ejercer su derecho de petición, habrán de ser rechazadas las excepciones de preterición legal y reparación satisfactiva opuestas por la parte demandada.

DÉCIMO SEXTO: Que, seguidamente, ha de emitirse pronunciamiento sobre la excepción de prescripción opuesta por el demandado, para lo cual, cabe tener presente que la prescripción es una institución que constituye un principio general de derecho cuya finalidad es propender a la estabilidad de las relaciones de derecho y, en definitiva, brindar seguridad jurídica, siendo, por lo tanto, la imprescriptibilidad una excepción que requiere de norma expresa, ya de derecho internacional o interno, que así lo establezca. En razón de ello, será fundamental para decidir la excepción en comento dilucidar si nuestro ordenamiento jurídico contempla una regla excepcional en dicho sentido.



DÉCIMO SÉPTIMO: Que, sobre la materia analizada, tuvo oportunidad de pronunciarse el pleno de la Excelentísima Corte Suprema con fecha 21 de enero de 2013, en la causa Rol de Ingreso Corte N^o 10.665-2011, en razón de la facultad prevista en el artículo 780 del Código de Procedimiento Civil, disposición que sabidamente mira al propósito de uniformar la aplicación del derecho. Dado este fin, cobra especial relevancia conocer los términos del antedicho juzgamiento para un caso equiparable al que aquí se ventila.

En este sentido, el fallo de casación aludido consideró que “*la doctrina y la jurisprudencia discrepan respecto de la posibilidad de extender el status de imprescriptibilidad que se predica de la acción penal tratándose de delitos de lesa humanidad, a las acciones dirigidas a obtener reparaciones de naturaleza civil por los mismos hechos. En efecto, se sostiene, por una parte, que tanto la responsabilidad civil como la penal derivada de esta clase de delitos se sujeta a un mismo estatuto de imprescriptibilidad, que tiene su fuente en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Éste postula que todo daño acaecido en el ámbito de los referidos derechos ha de ser siempre reparado íntegramente, con arreglo a las normas de derecho internacional convencional o, en su defecto, del derecho consuetudinario, de los principios generales o aun de la jurisprudencia emanada de tribunales de la jurisdicción internacional, mas con exclusión del derecho interno, pues los deberes reparatorios impuestos a los Estados en ese ámbito trascienden de las normas puramente patrimoniales del Código Civil. A la inversa, se ha sostenido reiteradamente, por esta misma Corte, que la acción civil pertenece al ámbito patrimonial, encontrándose por tanto regida por el Derecho Civil, toda vez que el Derecho Internacional no excluye la aplicación del derecho nacional sobre la materia, particularmente las reglas contenidas en los artículos 2497 y 2332 del citado Código, que regulan la institución de la prescripción en el área de la responsabilidad civil extracontractual, que es la que se debate en este caso*” .



Más tarde y luego de hacer presente que, al igual que en el caso de marras, *“al tiempo de los hechos investigados no se encontraban vigentes en Chile el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (...) ni la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica”*, la Corte de Casación razona que, no obstante ello, *“ninguno de los cuerpos normativos citados en el fallo impugnado establece la imprescriptibilidad genérica de las acciones orientadas a obtener el reconocimiento de la responsabilidad extracontractual del Estado o de sus órganos institucionales. Así, la propia Convención Americana de Derechos Humanos no contiene precepto alguno que consagre la imprescriptibilidad alegada por el recurrente. Además, ninguna de las disposiciones citadas en el recurso excluye respecto de la materia en controversia la aplicación del derecho nacional. En efecto, el artículo 1° sólo consagra un deber de los Estados miembros de respetar los derechos y libertades reconocidos en esa Convención y garantizar su libre y pleno ejercicio, sin discriminación alguna; y el artículo 63.1 impone a la Corte Interamericana de Derechos Humanos un determinado proceder si se decide que hubo violación a un derecho o libertad protegido”*.

Seguidamente y en cuanto a otros instrumentos internacionales como los mencionados en el libelo de marras, nuestro máximo tribunal remite el alcance de su aplicación, en exclusivo, al ámbito de las acciones para la persecución penal, para lo cual, tiene presente *“que, por su parte, el Convenio de Ginebra sobre Tratamiento de los Prisioneros de Guerra, que prohíbe a las partes contratantes exonerarse a sí mismas de las responsabilidades en que han incurrido por infracciones graves que se cometan en contra de las personas y bienes protegidos por el Convenio a que alude el artículo 131, debe entenderse necesariamente referido a infracciones del orden penal, lo que resulta claro de la lectura de los artículos 129 y 130 de dicho Convenio que aluden a actos contra las personas o bienes citando al efecto homicidio intencional, tortura o tratos inhumanos, incluso*



experiencias biológicas, el causar de propósito grandes sufrimientos o atentar gravemente contra la integridad física o la salud, el hecho de forzar a un cautivo a servir en las fuerzas armadas de la Potencia enemiga o privarle de su derecho a ser juzgado regular e imparcialmente al tenor de las prescripciones del Convenio” .

De otro lado, considera que “*la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad de 1968, que establece la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra según la definición dada en el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Núremberg, así como de los crímenes de lesa humanidad cometidos tanto en tiempo de guerra como en tiempo de paz, según la definición dada en el Estatuto antes indicado, se refiere también y únicamente a la acción penal. En efecto, en el artículo IV establece que los Estados Partes se comprometen a adoptar las medidas legislativas o de otra índole que fueran necesarias para que la prescripción de la acción penal o de la pena, establecida por ley o de otro modo, no se aplique a los crímenes antes indicados” .*

Descartada la existencia de una norma internacional expresa que consagre un régimen de imprescriptibilidad de las acciones civiles para hacer valer la responsabilidad patrimonial del Estado por vulneraciones a los derechos fundamentales, el Excelentísimo Tribunal estima que “*la prescripción constituye un principio general del derecho destinado a garantizar la seguridad jurídica, y como tal adquiere presencia en todo el espectro de los distintos ordenamientos jurídicos, salvo que por ley o en atención a la naturaleza de la materia se determine lo contrario, esto es, la imprescriptibilidad de las acciones” .* Luego, insiste en que “*a ello cabe agregar que no existe norma alguna en que se establezca la imprescriptibilidad genérica de las acciones orientadas a obtener el reconocimiento de la responsabilidad extracontractual del Estado o de sus órganos institucionales; y, en ausencia de ellas, corresponde estarse a las reglas del derecho común referidas específicamente a la materia” .*



Aplicando las antedichas reglas, la Corte Suprema entiende en vigor, para casos como el tratado, el artículo 2497 del Código Civil, según el cual, “*las reglas relativas a la prescripción se aplican igualmente a favor y en contra del Estado*” y el artículo 2332 del mismo Código, en virtud del cual, las acciones establecidas para reclamar la responsabilidad extracontractual prescriben en cuatro años, contados desde la perpetración del acto.

Como corolario de todo lo anteriormente reseñado, nuestro máximo tribunal estima pertinente reiterar “*que se ha ejercido en la especie por la parte demandante una acción de contenido patrimonial, cuya finalidad no es otra, en términos simples, que hacer efectiva la responsabilidad extracontractual del Estado. Lo anterior conduce necesariamente a concluir que no cabe sino aplicar en materia de prescripción las normas del Código Civil, lo que no contraría la naturaleza especial de la responsabilidad que se persigue en atención a que la acción impetrada pertenece -como se ha dicho- al ámbito patrimonial*” .

DÉCIMO OCTAVO: Que, a la luz de los criterios jurisprudenciales asentados con fines de uniformidad por el fallo en cuestión y que son susceptibles de traer al presente asunto, cabe afirmar que, ante la ausencia en nuestro ordenamiento jurídico de una norma, ya de origen nacional o internacional, que establezca de modo irrefutable la imprescriptibilidad de las acciones civiles reparatorias por las que se persigue la responsabilidad patrimonial del Estado, es menester estimar que esta clase de acciones se rigen por el principio general de prescriptibilidad que, en materia de responsabilidad civil extracontractual, se expresa en el tenor del artículo 2332 del Código Civil.

Enseguida, se debe observar que el ilícito materia de esta causa consiste en el hecho de la detención y desaparición de la víctima y hermano de los actores, el señor Ernesto René Torres Guzmán, el día 4 de octubre de 1973, de modo que



el plazo de prescripción habría de contarse, en principio, desde la fecha de comisión de tal ilícito.

DÉCIMO NOVENO: Que, con todo, ineludible es considerar que la prescripción liberatoria, en la medida que implica, asimismo, una sanción al acreedor negligente, supone que el titular de la acción goce de la posibilidad de instar por el respeto de sus derechos, cuestión que obliga a establecer que el cómputo del plazo correspondiente no debe hacerse a contar desde la perpetración del acto, descartando la mera literalidad del artículo 2332 del Código Civil, por tratarse de una situación en la que los actores titulares de la acción indemnizatoria no estaban en condiciones de haberla ejercido, atendida la vigencia del régimen de facto imperante a la época de los sucesos.

De este modo, es que dicho plazo debe contabilizarse, en consonancia con lo resuelto anteriormente por la Excelentísima Corte Suprema, desde que dichos titulares tuvieron ese conocimiento y contaron con la información necesaria y pertinente, así como un verdadero acceso a la justicia, para hacer valer ante los tribunales las acciones tendientes a dar reconocimiento a su derecho de resarcimiento por el daño sufrido, momento que está dado, precisamente, por la publicación del Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, el que dejara constancia de la condición de víctima del hermano de los actores, cuya desaparición causa el daño que se persigue indemnizar.

Sin embargo, cabe considerar que desde la fecha de entrega oficial y pública de este informe, el 4 de marzo de 1991, y hasta la fecha de notificación de esta demanda el día 5 de julio de 2018; el término de prescripción extintiva consagrado en el artículo 2332 del Código Civil se encontraba igualmente cumplido.

VIGÉSIMO: Que, en la especie, no se ha alegado ni probado que la prescripción que se ha hecho valer hubiere sido interrumpida o renunciada.



VIGÉSIMO PRIMERO: Que, por consiguiente, procederá acoger la excepción de prescripción de la acción deducida, razón por la que se omitirá todo pronunciamiento sobre las demás alegaciones de las partes que atañen al fondo de la misma.

VIGÉSIMO SEGUNDO: Que, sin perjuicio de rechazarse en todas sus partes el libelo de demanda, no se condenará en costas a los actores, por estimar que han litigado con motivo plausible.

POR ESTAS CONSIDERACIONES, y, visto además, lo dispuesto en los artículos 1698, 2314, 2315, 2332, 2497 del Código Civil; 144, 160, 170, 254 y siguientes del Código de Procedimiento Civil; Constitución Política de la República y Ley N° 18.575, **SE DECLARA:**

I. Que, se rechazan las excepciones de preterición legal y reparación satisfactiva opuestas por el demandado en su contestación de fecha 24 de julio de 2018.

II.- Que, se acoge la excepción de prescripción extintiva opuesta por el demandado en su contestación de fecha 24 de julio de 2018, por lo que se declara extinguida por prescripción la acción indemnizatoria planteada con fecha 28 de mayo de 2018.

III.- Que, habiéndose acogido la excepción de prescripción de la acción deducida en autos, se omite pronunciamiento sobre el fondo de la misma, y sobre las defensas que en subsidio se interpusieron por el demandado a su respecto, en su escrito de contestación.

IV.- Que, cada parte pagará sus costas.

REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y CONSÚLTESE SI NO SE APELARE
DICTADA POR DOÑA INELIE DURAN MADINA, JUEZ TITULAR



Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art.
162 del C.P.C. en **Santiago, veintiséis de Diciembre de dos mil diecinueve**





Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl> o en la tramitación de la causa.

A contar del 08 de septiembre de 2019, la hora visualizada corresponde al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>